



Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

En la ciudad de Mar del Plata, a los días del mes de febrero de dos mil veintiseis, reunidos los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata al análisis de estos autos caratulados: “**SEO SA c/ AFIP s/ AMPARO LEY 16.986**”, Expediente FMP 7755/2024, provenientes del Juzgado Federal, Secretaría Civil de la ciudad de Dolores. El orden de votación es el siguiente: Dr. Alejandro O. Tazza, Dr. Eduardo P. Jiménez.

El Dr. Tazza dijo:

I. Llegan los autos a esta Alzada con motivo del recurso de apelación deducido por el demandado en oposición a la sentencia que: **1º)** Hace lugar a la acción de amparo promovida por la señora Alejandra Gabriela Romano, en su carácter de representante de SEO S.A., y condena a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para que proceda en el plazo de cinco (5) días a restablecer la Clave Única de Identificación Tributaria correspondiente a la sociedad accionante; **2º)** Regula los honorarios del letrado de la amparista, Dr. Marcos Gabriel Gutman, en la suma de pesos un millón trescientos treinta y siete mil ciento treinta y ocho (\$1.337.138) que equivalen a 22 UMA (valor UMA \$ 60.779 Res 2375/2024 C.S.J.N), con más el I .V.A. si correspondiere y aportes previsionales (arts. 48, 56 y 57 de la ley 27.423).

Los agravios del recurso del demandado se encuentran dirigidos a cuestionar la sentencia que hace lugar al amparo. En primer término, señala que no se encuentra acreditado que la CUIT del contribuyente se encuentre limitada o que no pueda girar comercialmente sin problemas. Sostiene que la AFIP luego de un proceso administrativo, dispuso una marca preventiva sobre la CUIT en donde se consigna la existencia de “requerimientos pendientes”.

Agrega que el amparista no acreditó el perjuicio que invoca al interponer la acción, ni arbitrariedad manifiesta por parte de la AFIP. Sostiene que se puede obtener la quita de la marca indicada, con solo responder el requerimiento fiscal que se halla pendiente. Asimismo, indica que la carga de demostrar la inexistencia o insuficiencia de otras vías que permitan obtener la



protección que se pretende, debe ser cumplida por quien demanda (Fallos: 313:101; 317:655 entre otros); lo cual -a su entender- no acontece en autos.

Finalmente, cuestiona los honorarios por considerarlos altos. Por todo ello, peticiona se revoque la sentencia.

II. Antes de comenzar con el desarrollo de las cuestiones propuestas a revisión de esta Alzada he de señalar que sólo se atenderá en el presente voto aquellos planteos que sean considerados esenciales a los fines de la resolución del litigio. En este entendimiento, he de recordar que los jueces no están obligados a considerar todos y cada uno de los planteos de las partes, pues basta que lo hagan respecto de aquellos considerados esenciales y decisivos para el fallo de la causa.

Nuestra Corte Suprema de Justicia ha sentado la doctrina según la cual los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (ver LL 144 p. 611, 27.641-S; LL 145 p. 346; LL 148 p. 692, 29.625-S; Fallos 296:445; 297:333 entre otros).

III. Entrando a resolver la primera cuestión traída a debate, resulta oportuno precisar algunas consideraciones atinentes a la vía utilizada por el amparista para la dilucidación de la temática planteada.

En primer lugar, debemos recordar que en materia de amparos el actual texto del art. 43 de nuestra Constitución Nacional, reza: *“Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto y omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución...”*.

En efecto, la acción de amparo constituye un remedio de excepción cuya utilización está reservada a los supuestos en que la carencia de otras vías legales más aptas para resolverlos pudiera afectar derechos constitucionales. Así, su apertura requiere de circunstancias de muy definida singularidad, caracterizada por la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

demostración de que el daño concreto y grave ocasionado sólo puede ser reparado acudiendo a la acción urgente y expedita del amparo, que no existan remedios apropiados para obtener la protección del derecho que dice conculcado o cuando se acredite que acudiendo a ellos, peligre la salvaguarda de los mismos.

En tal orden de ideas, este Tribunal ha significado en numerosos precedentes, que la acción de amparo elaborada e instituida para hacer efectivas las garantías constitucionales *“...es un proceso excepcional, utilizable en casos extremos, cuando se pongan en peligro las salvaguardas de derechos fundamentales y cuando la carencia de otras vías legales no permita alcanzar los resultados queridos... o cuando no exista medio judicial idóneo”* (CFAMDP, “Hogar San Agustín s/ amparo”, registrada al T° XXXVIII F° 7684 del libro de Sentencias).

Pero junto a estas características que se requieren para su admisión, también se ha exigido que los jueces efectúen un examen atento y circunstanciado de las constancias de la causa para determinar si es procedente rechazar aquella acción por dichos motivos. El Máximo Tribunal Federal descalificó decisiones de este tipo cuando se adoptaron por aplicación de un criterio en extremo formalista, que atentaba contra la efectiva protección de los derechos que aquel instituto busca asegurar, por ejemplo, cuando no se acreditaron en forma concreta cuáles fueron los elementos probatorios que no se pudieron utilizar para dilucidar la cuestión, así como la incidencia que éstos hubieran podido tener sobre el resultado final del proceso, al considerar que esa omisión era demostrativa de la deficiente fundamentación del pronunciamiento (Fallos: 327:2955; 329:899).

En el caso de autos, teniendo en cuenta que -conforme la naturaleza de los derechos comprometidos- la cuestión sometida a debate no permite que se extienda en el tiempo una larga discusión en el marco de un proceso ordinario, considero que no existe duda alguna respecto de la idoneidad de esta vía para la dilucidación de los derechos constitucionales que el amparista estima vulnerados por el demandado.

Además, en el caso de autos no cabe extremar la aplicación del principio según el cual el amparo no procede porque el afectado tiene a su alcance una



vía administrativa a la cual acudir, pues a veces los propios valores en juego y la normalmente urgencia del caso, se contraponen al ejercicio de soluciones de esa índole. Es más, rechazar la procedencia del amparo porque el amparista contaría con un procedimiento administrativo para restablecer o desafectar la marca preventiva de su CUIT constituye un supuesto de exceso rigor ritual.

IV. Sentado entonces que el amparo resulta ser la vía idónea para debatir el objeto de este pleito, corresponde comenzar con el análisis de los restantes agravios. En esa tarea, encuentro que las cuestiones que el recurrente propone a revisión de esta Alzada poseen íntima relación entre sí, por lo que considero conveniente su tratamiento de manera conjunta.

En el marco de cuanto se viene exponiendo, corresponde a esta Alzada examinar si el sentenciante ha realizado o no una correcta valoración de las circunstancias y constancias probatorias que gravitaron en la causa.

Dedicado a la tarea referida en el párrafo anterior, encuentro que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) procedió a marcar la CUIT de la sociedad reclamante, consignando la existencia de requerimientos pendientes, ello sin el dictado de un acto administrativo previo que delimite los alcances de la decisión, privando al contribuyente de las garantías del debido proceso y de ejercer los remedios que el ordenamiento jurídico establece para impugnar las decisiones administrativas.

En efecto, existió un comportamiento irregular por parte del órgano administrativo pues efectivizó una “marca” o “tilde” en el padrón de contribuyentes que ocasiona el impedimento de la impresión de la constancia de CUIT (al ingresar a la web del organismo fiscal, en la pestaña “constancia de inscripción”, una vez puestos los dígitos del contribuyente aquí involucrado, surge que la CUIT registra requerimientos de ARCA pendientes de respuesta, sin ser posible obtener y visualizar la constancia de inscripción respectiva), sin permitirle al contribuyente ejercer su derecho de defensa. Entonces, en el caso de autos la irrazonabilidad se configuró por la alteración del curso natural del procedimiento administrativo, ya que primero se aplicó una sanción en una clara inversión del procedimiento sancionatorio.





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

Tampoco resulta convincente la invocación de que la medida fue adoptada de manera preventiva pues es sabido que *“el acto de cancelación de CUIT reviste carácter sancionatorio, y significa la desaparición de la identidad tributaria del contribuyente, o responsable, lo que le impide desarrollar su labor en el marco de la legalidad”* (del voto del Dr. Jiménez al que adherí en *“Estación del Ovalo SRL c/ AFIP s/ amparo”* de fecha 01 de octubre del 2015). En el mismo sentido se ha expresado que *“una medida de este tipo significa la desaparición de la identidad tributaria del contribuyente o responsable que le impide desarrollar su labor en el marco de la legalidad, no sólo en relación con el organismo fiscal sino también con los demás sujetos que se vincule tanto en el aspecto comercial como específicamente fiscal”* (*“FDM Management SRL c/ EN – AFIP – DGI – RG 3358/12 s/ amparo ley 16.986”*, sentencia de la Cámara Federal Contencioso Administrativa del 20 de febrero de 2014).

Por todo ello, y sin perjuicio de las facultades que posee la Administración al pleno ejercicio de las funciones de control y determinación con arreglo a la legislación vigente, así como las de perseguir el cobro de los importes que el organismo fiscal entiende que el contribuyente adeuda, considero que en el caso de autos corresponde confirmar la sentencia en cuanto hace lugar a la acción de amparo promovida por la señora Alejandra Gabriela Romano, en su carácter de representante de SEO S.A., y condena a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para que proceda a restablecer la Clave Única de Identificación Tributaria correspondiente a la sociedad accionante, por lo menos hasta el dictado del correspondiente acto administrativo.

V. Finalmente, abordando el análisis de los emolumentos fijados, valorando las labores profesionales realizadas, su extensión y resultado, como la complejidad e importancia del juicio, teniendo en cuenta el motivo, calidad jurídica del trabajo, la trascendencia del pleito, el tiempo empleado en la solución del litigio, y que las presentes actuaciones carecen de monto que pueda ser considerado como base arancelaria, en virtud de encuadrarse dentro de lo dispuesto en los arts. 1, 16, 19, 44 Y 48 de la Ley 27.423, aplicable al caso de Autos, es que considero que corresponde confirmar los emolumentos fijados por el Juez de grado en el decisorio recurrido.



Asimismo, resulta pertinente dejar constancia que la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación elevó el valor del U.M.A. a la suma de pesos sesenta y tres mil quinientos cuarenta y cinco (\$ 63.545) a partir del 01 de octubre de 2024 (Resolución SGA 3495/2024 Ac. 39/202).

VI. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo: **1º)** Confirmar la sentencia , en cuanto fue materia de agravios y apelación; **2º)** con costas a la vencida (art. 68 CPCCN).

Tal es mi voto.

El Dr. Jiménez dijo:

I) Que he de adherir a la propuesta del Dr. Alejandro Tazza, aunque me permitiré adunar al mismo, las siguientes consideraciones adicionales que hacen al específico sentido de mi voto:

Diré, en primer lugar, que aun existiendo en Autos una vía administrativa a la que el peticionante pudo haber recurrido, lo cierto es que luego de operada la reforma constitucional de 1994, esta condición se encuentra eliminada, suministrando en consecuencia el Art. 43 C.N. al ciudadano, “(...) un acceso directo (facultativo) al amparo, cuando no existan trámites jurisdiccionales que soporten idénticas cuestiones planteadas (Cfr. Gozaíni, Osvaldo “Derecho Procesal Constitucional/Amparo” Edit. Rubinzal- Culzoni, pág. 315).

Debe recordarse aquí que vigente la reforma constitucional de 1994, es dable interpretar, como a su tiempo lo hizo Germán Bidart Campos (Cfr. De su autoría “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino” EDIAR, 1995, T º VI), que “(...) la referencia constitucional al medio judicial más idóneo – omitiéndose allí aludir a la voz “vías administrativas” – no implica en modo alguno obturar la procedencia del proceso de amparo por el solo hecho de que existan procedimientos administrativos en curso, o simplemente que ellos existan y no se hubiesen utilizado”.





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

Es que claramente, y como lo fundamentaré seguido en el presente supuesto, el desplazamiento del proceso de amparo no puede darse “en abstracto”, sino que ello depende de la evaluación en cada caso concreto que efectúa el tribunal interviniente al resolver el planteo que se le somete.

Así las cosas, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afianzado la tesis de que es posible plantear el amparo, aunque se hubiere iniciado un trámite administrativo (no agotado, entonces) si al promotor del amparo la consecución de ese trámite le irroga un agravio de insuficiente reparación ulterior (Cfr. CSJN, 28/02/84, “TSS” 1984-743; íd CSJN, 03/03/88 “LL” 1990-A-581).

Y la cuestión central a ser aquí develada involucra el supuesto del bloqueo del CUIT del contribuyente amparista por parte de AFIP/DGI sin la existencia de un acto administrativo previo, sin que ello le fuese comunicado al contribuyente en sede administrativa, y en clara violación a esenciales reglas del debido proceso, que hacen particularmente al derecho de defensa en juicio de los ciudadanos.

Al coincidir con el Magistrado que me antecede en el voto, en que el acto bloqueo de CUIT reviste carácter sancionatorio, y significa la desaparición de la identidad tributaria del contribuyente, o responsable, lo que le impide desarrollar su labor en el marco de la legalidad, y por ello concuerdo además con el Magistrado Tazza en cuanto señala que la AFIP cuenta con facultades bastantes para perseguir el cobro de tributos, lo que representa un fin loable para la marcha de nuestra sociedad democrática, pero tales facultades deben ejercerse conforme a derecho y en forma razonable, con lo que la sanción impuesta al amparista en el presente caso, adolece de notoria irrazonabilidad y lesiona el derecho a la tutela jurisdiccional, que le asiste a todo habitante de la República también en sede administrativa, que ha sido concebido desde tiempos inmemoriales como “(...) la posibilidad de acceso a un proceso no desnaturalizado que pueda cumplir con su misión de satisfacer las pretensiones que allí se formulen” (Cfr Cross& Harris “Precedent in English Law” Edit. Clarendon Law Series, 4^a Ed., Oxford Press, 1991).

Lo expuesto implica entonces, rescatar y recrear el concepto de que los Magistrados debemos asegurar a los justiciables la tutela judicial continua y



efectiva, como asimismo el acceso irrestricto a la justicia y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos, en todo procedimiento administrativo o judicial que lo involucre.

II) Finalmente, y sin olvidar que el régimen específico regulatorio de la Acción de Amparo en el orden federal se encuentra efectivamente normado por el Art. 14 de la Ley 16.986, cabe enfatizar que, de todos modos, esta normativa particular no se aleja de la regla general de imposición de costas al vencido.

En consecuencia, cabe resaltar que en el proceso de amparo rige el principio objetivo de la derrota, que se expresa a partir de las dos siguientes manifestaciones posibles: a) el vencimiento en la pretensión constitucional, que demuestra la instauración de un vencido que habrá de ser condenado en costas y b) la cuestión abstracta, que toma cuerpo con el cumplimiento del acto al tiempo de tener que ofrecer el informe circunstanciado, originando con ese acto la no distribución de gastos causídicos. Ha señalado la mejor doctrina, que “(...) en este último supuesto, las costas deben entenderse imputadas en el orden causado” (Cfr. Gozaíni, Osvaldo “Derecho Procesal Constitucional/Amparo” Edit. Rubinzall-Culzoni, pág. 511).

Es en este contexto que no puedo tan siquiera interpretar que AFIP/DGI hubiese podido obrar con una convicción de que su accionar lo fuese conforme a derecho. Bien se indicó en este sentido que “(...) si tenemos en cuenta que la actuación con derecho otorga la verdadera dimensión de la objetividad en materia de costas, puede colegirse que no basta la mera creencia subjetiva del litigante, en orden a la razonabilidad de su pretensión, para eximirlo de costas. El punto de partida nace de circunstancias concretas, puesto que todo aquel que somete una cuestión a la decisión judicial, es porque cree que le asiste razón para petitionar como lo hace” (Cfr. Gozaíni, Osvaldo, Cit., pág.510, el resaltado me pertenece).

III) Por los argumentos antes expuestos, acompañaré el voto del Dr. Tazza, y también propongo al Acuerdo: **1) CONFIRMAR la sentencia** puesta en crisis, **2) con IMPOSICIÓN DE COSTAS** a la perdidosa (Art. 14 de la Ley 16.986).

Tal es el sentido de mi voto.





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

/// del Plata, de febrero de 2026.

VISTOS:

Estos autos caratulados: “**SEO SA c/ AFIP s/ AMPARO LEY 16.986**”, Expediente FMP 7755/2024, provenientes del Juzgado Federal, Secretaría Civil de la ciudad de Dolores y lo que surge del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

1º) Confirmar la sentencia, en cuanto fue materia de agravios y apelación.

2º) Con costas a la vencida (art. 68 CPCCN).

REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.

DR. ALEJANDRO O. TAZZA

JUEZ DE CÁMARA

DR. EDUARDO P. JIMÉNEZ

JUEZ DE CÁMARA

Se deja constancia que se encuentra vacante el cargo de tercer integrante de este Tribunal (art. 109 RJN); que los jueces han firmado electrónicamente esta sentencia desde sus respectivos despachos; y que en el día de la firma de la misma en el Sistema Lex 100 fue notificada electrónicamente a las partes con domicilio constituido.

DR. WALTER PELLE

SECRETARIO

Fecha de firma: 13/02/2026

Firmado por: ALEJANDRO OSVALDO TAZZA, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO PABLO JIMENEZ, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: WALTER DAVID PELLE, SECRETARIO DE CAMARA



#39179994#488706362#20260210074335969